

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*



Día Mundial de la Filosofía

OEA (CIDH):

- **CIDH finaliza 185 Período de Sesiones con la aprobación de nuevo plan estratégico.** La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 185 período de sesiones del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2022, de manera híbrida, en el cual se llevaron a cabo 21 audiencias públicas sobre temas de derechos humanos en la región y en Estados miembros de la OEA, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, y Nicaragua. Una de las decisiones relevantes que tomó la CIDH, en el marco de las reuniones del pleno, en este período de sesiones fue la aprobación por unanimidad del Plan Estratégico 2023-2027 que será presentado próximamente. "El plan estratégico es el principal instrumento institucional para gestionar y contribuir a los desafíos del hemisferio sobre derechos humanos, elaborado a partir de un proceso colectivo con una amplia participación de representantes de los Estados y la sociedad civil, de quienes hemos recogido relevantes y estratégicas sugerencias. Este plan es la guía que establece las acciones y temáticas prioritarias en los próximos 5 años, y que pone en el centro a las personas y sus derechos, para el cumplimiento del mandato de la Comisión Interamericana." destacó la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi. Durante las audiencias, se recibió información por parte de los Estados y de organizaciones de sociedad civil, y llamó a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en relación con temáticas como libertad de expresión, pueblos indígenas, personas con discapacidad, militarización, justicia transicional y perspectiva de género, personas privadas de libertad, libertad de asociación, y derechos de las personas LGBTI. Además, se llevaron a cabo tres audiencias sobre los casos 13.730 - G.C.A.M. e hijo vs Ecuador, 13.141 - Luis Alfonso Hoyos Aristizábal vs Colombia, y 14.042 - Anastasio Hernández Rojas vs Estados Unidos. Asimismo, la implementación y el seguimiento de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia y de personas detenidas en Guantánamo Bay respecto de Estados Unidos fueron temas de dos audiencias públicas. También se realizaron audiencias regionales acerca de los impactos de las leyes de criminalización que continúan afectando a las personas LGBTI, la situación de la libertad religiosa, y el respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas. Además, se llevaron a cabo dos audiencias públicas regionales de oficio: Políticas de frontera y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana; y Reparación con perspectiva de género y diversidad en la justicia transicional. En

esta última, la CIDH reconoció el rol de las organizaciones, mujeres y personas LGBTI sobrevivientes en la visibilización y promoción del desarrollo de nuevos estándares y buenas prácticas en reparaciones con enfoque de género y diversidad. "Es fundamental el rol que históricamente han desempeñado las organizaciones, víctimas y sobrevivientes en visibilizar y promover el desarrollo de nuevos estándares y buenas prácticas de reparaciones con enfoque de género y diversidad. Es necesario seguir trabajando para que las reparaciones sean integrales y transformadoras de los contextos de desigualdad y discriminación", señaló la Comisionada Julissa Mantilla, Presidenta de la CIDH. En la segunda semana del 185 Período de Sesiones, la CIDH sesionó desde su sede, y aprobó 19 informes de fondo, se reunió con Estados del hemisferio, y con representantes de organizaciones de la sociedad civil interamericana. Además, se llevó a cabo una reunión de alto nivel con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, en la cual se dialogó sobre avances y desafíos de dicha institución. Además, la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la no Repetición también de Colombia presentó los hallazgos y recomendaciones de su informe final, el cual contó con la cooperación técnica de la CIDH en el marco del acuerdo de cooperación entre ambas instituciones. La Comisión agradece a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil por su participación en el 185 período de sesiones, y recuerda que acorde al artículo 63 de su Reglamento, los Estados deben garantizar la seguridad de todas las personas participantes, y no ejercer represalias contra ellas o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión. Acompaña este comunicado de prensa un anexo con los resúmenes de todas las audiencias públicas celebradas. Los videos de las audiencias están disponibles (subtítulos español e inglés), y las fotos se pueden encontrar en Flickr. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Colombia (CC):

- Corte Constitucional protege derechos de campesino que fue detenido por resguardo indígena, pese a no pertenecer a ninguna comunidad étnica.** La Corte Constitucional protegió los derechos de un ciudadano que fue privado de la libertad por el Cabildo indígena de Toribío (Cauca) acusado de estafar a varios de sus integrantes, a quienes supuestamente habría pedido dinero a cambio de ayudarles en el trámite de subsidios de vivienda e indemnizaciones, entre otras cosas. El ciudadano, mediante agente oficioso, aseguró que fue sometido a un proceso de investigación y juzgamiento sin tener en cuenta que no hace parte de ninguna comunidad indígena, sino que es un campesino de Apartadó, Antioquia. Además, alegó que fue detenido sin acceso a una asesoría legal ni posibilidad de comunicarse con el exterior, y manifestó ser víctima de amenazas por parte de un integrante de la comunidad indígena. La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, determinó que el Cabildo indígena vulneró el derecho al debido proceso del actor, en su faceta de juez natural, lo cual derivó en una limitación injustificada de su libertad. Según el Alto Tribunal, no se desconoce la autonomía que la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación les ha otorgado a las comunidades indígenas para ejercer su propia jurisdicción. Sin embargo, las limitaciones a su autonomía encuentran respaldo constitucional cuando se trate de proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales. "Si bien el Resguardo de Toribío relató contar con las instituciones indígenas, con capacidad para investigar y dictar justicia, esta Sala no puede desconocer que hay dudas respecto a las autoridades, procedimientos y sanciones que terminan por amenazar la garantía del debido proceso de una persona externa a la comunidad, que está siendo investigado y de la cual no se desprende una identidad cultural", indicó la sentencia. Por otra parte, no se cumplieron con los cuatro elementos que se deben tener en cuenta para que el caso sea tramitado por la Jurisdicción Especial Indígena (JEI): territorial, objetivo, subjetivo e institucional. Dentro del proceso se encontraron acreditados el elemento territorial y objetivo, pero no el subjetivo e institucional, debido a que el ciudadano no se autoidentifica como indígena, no fue reconocido por ellos como miembro de su comunidad, ni se encuentra censado dentro de ninguna comunidad étnica. "Tampoco el elemento institucional, por cuanto la Sala no pudo identificar a las autoridades, procedimientos y sanciones que permitieran el despliegue efectivo de las garantías para proteger el debido proceso del investigado en el caso concreto", indicó la sentencia. El fallo confirmó la sentencia de un juez de Popayán que dispuso la libertad del ciudadano y le ordenó al Cabildo indígena que le devuelva todas sus pertenencias. También ordenó a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca, continuar con la investigación para esclarecer lo más pronto posible los hechos denunciados por los comuneros del

Resguardo indígena de Toribío, mientras que la Unidad Nacional de Protección tendrá que realizar un estudio de riesgo para determinar si el accionante puede ser beneficiario de una medida de protección, en caso de que haya remitido los documentos para ello. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó parcialmente su voto.

- **Corte Constitucional: personas privadas de la libertad que pertenecen a la comunidad LGBTI deben ser reclusas en condiciones que garanticen su seguridad y no discriminación.** La Corte Constitucional advirtió que en los casos de privación de la libertad de personas que hagan parte de la comunidad LGBTI, es necesario que se analicen, al momento del ingreso al centro carcelario, las condiciones de reclusión más adecuadas para garantizar su seguridad e integridad física, sin incurrir en medidas de discriminación debido al género o a la tendencia sexual. El pronunciamiento fue hecho al estudiar la tutela que presentó una persona interna en la cárcel de Ibagué, quien alegó la violación de sus derechos por haber sido reclusa transitoriamente de manera injustificada en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) de dicho centro de detención, después de su traslado desde la cárcel de Cúmbita (Boyacá). El cambio también afectó la continuidad de la atención en salud de las enfermedades por las que antes era tratada. La Sala Tercera de Revisión, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, señaló que la asignación del lugar de reclusión de una persona que haga parte de la comunidad LGBTI se debe hacer teniendo en cuenta sus condiciones particulares, siendo inadmisibles la utilización de espacios destinados para cumplir medidas de aislamiento bajo el pretexto de que con ellos se busca garantizar la integridad del interno. “La Sala reitera, a través de este fallo, las obligaciones del Estado en materia penitenciaria y carcelaria en relación con la protección de los derechos de quienes hacen parte de la comunidad LGBTI, que por diferentes circunstancias han padecido históricamente hechos de discriminación y/o victimización, en los establecimientos de reclusión”, concluyó la Corte. Teniendo en cuenta que la cárcel de Ibagué reportó el lugar actual de reclusión de la accionante, el cual fue asignado atendiendo sus requerimientos y condiciones particulares, la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en este tema particular. Sin embargo, en relación con los servicios de salud reclamados por la ciudadana, se constató que su traslado a la cárcel de Ibagué provocó una interrupción en la prestación de los servicios médicos que venía recibiendo en la cárcel de Cúmbita, lo cual vulneró su derecho fundamental a la salud. El fallo otorgó 48 horas a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para que realice las gestiones administrativas necesarias que le permitan a la accionante continuar recibiendo de manera efectiva los medicamentos, exámenes y citas médicas de la especialidad que le sean ordenadas por su médico tratante, y adoptando las previsiones para asegurar que la continuidad en la atención médica no se vea afectada por eventuales traslados entre centros de reclusión.

Chile (Poder Judicial):

- **Corte Suprema otorga títulos póstumos de abogada y abogados a familiares de detenida desaparecida y ejecutados políticos que figuran en el Informe Rettig.** El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia en que el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990 y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile. A la ceremonia asistieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, autoridades y agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y familiares de los homenajeados. El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados, considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas. El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos. “Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar

presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro en cuanto a que toda vulneración a estos derechos genera un deber de reparación, el que indiscutiblemente debe ser integral. “De este modo, la reparación en esta materia no se agota en la determinación de una responsabilidad penal determinada o de una indemnización pecuniaria específica. También existen acciones concretas de otro orden que, ejercidas dentro de las competencias legalmente establecidas, permiten realzar la importancia de respetar y garantizar valores imprescindibles para toda persona y sociedad, del que fueron desarraigados quienes hoy reconocemos como abogadas y abogados.”, dijo el ministro Fuentes Belmar. Agregó: “Puedo señalar, en virtud de lo mandatado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia. El aporte del Poder Judicial en este ámbito no solo se expresa en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales; también desde nuestras funciones no jurisdiccionales existen posibilidades de acción que suman a una reparación integral. Entre ellas, justamente se encuentra la realización de conmemoraciones y homenajes que evoquen las vidas e historias de las víctimas que vieron truncada su posibilidad de titulación por lamentables hechos atentatorios a las reglas básicas de convivencia. “Esta comprensión de la justicia como un proceso integral es precisamente lo que nos convoca el día de hoy a realizar este acto que, además de su carácter extraordinario, especial y trascendente, es también emotivo.”

Unión Europea (TJUE):

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-331/20 P / Volotea / Comisión y C-343/20 P / easyJet Airline / Comisión.*** El Tribunal de Justicia anula las dos sentencias del Tribunal General por las que se desestimaron los recursos interpuestos por Volotea e easyJet contra la Decisión de la Comisión relativa a las ayudas de Estado concedidas por Italia a los aeropuertos sardos. También se anula dicha Decisión, en la medida en que se refiere a Volotea y a easyJet, puesto que la Comisión no demostró que se hubiera concedido una ventaja a estas dos compañías aéreas. A raíz de un procedimiento de investigación formal referido a una ley regional italiana y a sus actos de desarrollo, en virtud de los cuales las entidades gestoras de los aeropuertos de Cerdeña podían recibir financiación para desarrollar rutas aéreas con origen y destino en la isla, la Comisión decidió que las diferentes disposiciones citadas constituían ayudas estatales ilegales e incompatibles con el mercado interior (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). Entre otras compañías aéreas, se consideró que Volotea e easyJet se habían beneficiado de dichas ayudas en conexión con sus actividades en los aeropuertos de Cagliari-Elmas y de Olbia. Estas dos compañías aéreas interpusieron entonces sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida. Mediante sentencias de 13 de mayo de 2020, 1 el Tribunal General desestimó dichos recursos. Seguidamente, Volotea e easyJet interpusieron sendos recursos de casación ante el Tribunal de Justicia para anular las sentencias del Tribunal General. En su sentencia dictada hoy en los asuntos acumulados C-331/20 P y C-343/20 P, el Tribunal de Justicia anula las sentencias del Tribunal General y la Decisión controvertida en la medida en que se refiere a Volotea y a easyJet. El Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que la calificación de «ayuda de Estado» en el sentido del Derecho de la Unión exige que concurren todos los requisitos establecidos en el Tratado FUE, entre los que figura que la medida estatal controvertida en un determinado supuesto debe conferir una ventaja a la empresa o a las empresas beneficiarias de ella. El Tribunal de Justicia recuerda, asimismo, que de su jurisprudencia reiterada se deduce que concurre tal ventaja en caso de cualquier medida estatal que, con independencia de su forma y sus objetivos, pueda favorecer directa o indirectamente a una o varias empresas con respecto a la situación en que se hallarían en condiciones normales de mercado. Seguidamente, subraya que, en principio, la caracterización de la existencia de tal ventaja se realiza aplicando el principio del operador privado en una economía de mercado, a menos que no exista posibilidad alguna de comparar el comportamiento del Estado de que se trata en un caso concreto con el de un operador privado —por ejemplo, porque tal comportamiento se halle indisociablemente vinculado a la existencia de una infraestructura que ningún operador privado nunca podría haber creado— o que el Estado haya actuado en su condición de poder público. No obstante, indica el Tribunal de Justicia, la mera aplicación de prerrogativas de poder público, como el recurso a instrumentos de carácter legislativo o fiscal, no implica, en sí misma, la inaplicabilidad de dicho principio, puesto que es la naturaleza económica de la intervención estatal en cuestión y no los medios empleados para ello la que hace que dicho principio sea aplicable. Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que la aplicación del principio del operador privado en una economía de mercado implica que la Comisión ha de demostrar, tras una apreciación global que tenga en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de que se trate, que la empresa o las empresas

beneficiarias de la medida estatal en cuestión no habrían obtenido manifiestamente una ventaja comparable por parte de un operador privado normalmente prudente y diligente que se hallara en una situación lo más semejante posible y que actuara en condiciones normales de mercado. En este contexto, la Comisión debe tener en cuenta todas las opciones razonablemente contempladas por ese operador, cualquier información disponible y que pueda influir significativamente en su decisión y la evolución previsible en el momento de la adopción de la decisión de conceder una ventaja. Además, debe determinar si podía considerarse que la operación por la que se concedió la ventaja tenía una racionalidad económica, comercial y financiera, habida cuenta de sus perspectivas de rentabilidad a corto plazo o a más largo plazo y de los demás intereses comerciales o económicos de aquella. En los presentes asuntos, el Tribunal de Justicia declara que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General no verificó si en la Decisión controvertida la Comisión había cumplido la obligación que le incumbía de determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados entre las entidades gestoras de aeropuertos y las compañías aéreas constituían operaciones normales de mercado. En efecto, el Tribunal General erró al declarar que el principio del operador en una economía de mercado no era aplicable porque la región había perseguido objetivos de política pública y había actuado a través de entidades gestoras de aeropuertos que eran empresas privadas. Además, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que debía entenderse que Volotea e easyJet habían disfrutado de una «ventaja» porque la remuneración que se les había abonado en virtud de los contratos que habían celebrado con las entidades gestoras de los aeropuertos de Cagliari-Elmas y de Olbia no constituía la contraprestación de servicios que respondieran a necesidades reales de la Región y porque, por otra parte, esos contratos se habían celebrado sin que previamente se hubiera aplicado un procedimiento de licitación o un procedimiento equivalente. Por lo que respecta a la Decisión controvertida, el Tribunal de Justicia declara que la Comisión también incurrió en errores de Derecho al no aplicar el principio del operador privado en una economía de mercado en los citados asuntos y al estimar la existencia de una ventaja sobre la base de consideraciones jurídicas y fácticas que no podían fundamentar tal apreciación. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia anula tanto las sentencias recurridas en casación como la Decisión controvertida.

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-54/21 | ANTEA POLSKA y otros. La protección de la confidencialidad en el ámbito de la contratación pública debe ponderarse con las exigencias de transparencia y de tutela judicial efectiva.*** El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impone la publicidad de cualquier información comunicada por los licitadores, con la única excepción de los secretos empresariales, ya que tal normativa puede impedir que el poder adjudicador decida no divulgar determinados datos que, aun cuando no constituyan secretos empresariales, no deben ser accesibles. La Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie (Empresa Estatal de Gestión del Agua de Polonia; en lo sucesivo, «poder adjudicador») convocó una licitación abierta para la adjudicación de un contrato público relativo al desarrollo de proyectos de gestión medioambiental de determinadas demarcaciones hidrográficas en Polonia. Al término de dicho procedimiento, uno de los licitadores, al que no se adjudicó el contrato, interpuso un recurso ante la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala Nacional de Recurso, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, a fin de obtener la anulación de la decisión de adjudicación del contrato a otro licitador, un nuevo examen de las ofertas y la divulgación de determinada información. El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de los límites de la confidencialidad de la información que los licitadores aportan junto con sus ofertas en el marco de los procedimientos de contratación pública. Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia aporta precisiones en cuanto al alcance y a la aplicabilidad de la prohibición de que los poderes adjudicadores divulguen la información que los candidatos y licitadores les comunican en el ámbito de tales procedimientos. **Apreciación del Tribunal de Justicia.** En primer lugar, el Tribunal de Justicia aborda la delimitación del alcance de la obligación de tratamiento confidencial. A este respecto, declara que la Directiva 2014/24 sobre contratación pública no se opone a que un Estado miembro establezca un régimen que delimite el alcance de la obligación de tratamiento confidencial basándose en un concepto de secreto empresarial que corresponde, en lo esencial, al que figura en la Directiva 2016/943. 2 En cambio, dicha Directiva se opone a tal régimen cuando no esté constituido por normas que permitan a los poderes adjudicadores denegar excepcionalmente la divulgación de información que, aun cuando no esté comprendida en el concepto de secreto empresarial, no deba ser accesible. El Tribunal de Justicia alcanzó tal conclusión por considerar que la Directiva 2014/24 protege un ámbito de confidencialidad más amplio que el de los secretos empresariales. Recuerda, no obstante, que, en virtud de dicha Directiva, la prohibición de divulgar información facilitada a título confidencial se aplica salvo que se disponga de otro modo en el Derecho nacional a que esté sujeto el poder adjudicador. Por consiguiente, cada Estado miembro puede ponderar la confidencialidad establecida por esta Directiva y las normas de Derecho nacional que persigan otros intereses legítimos, como el acceso a la información, con el fin de garantizar la mayor transparencia

posible de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Dicho esto, los Estados miembros deben abstenerse de introducir regímenes que no garanticen una competencia no falseada, que obstaculicen la ponderación entre la prohibición de divulgación de información confidencial y el principio general de buena administración, del que deriva la obligación de motivación, para garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva de los licitadores excluidos, o que alteren el régimen en materia de publicidad de los contratos adjudicados y las normas relativas a la información de los candidatos y de los licitadores. Pues bien, una normativa nacional que impone la publicidad de cualquier información comunicada al poder adjudicador por la totalidad de los licitadores, con la única excepción de la información comprendida en el concepto de secreto empresarial, puede impedir que, en virtud de uno de los intereses y objetivos reconocidos por la Directiva 2014/24, relativos a la aplicación de las leyes, al interés público, a los intereses comerciales legítimos de un operador económico y a la competencia leal, 4 el poder adjudicador decida no divulgar determinada información no comprendida en este concepto. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que, a efectos de determinar si va a denegar, a un licitador cuya oferta admisible haya sido rechazada, el acceso a la información que los demás licitadores hayan presentado sobre su experiencia pertinente y las referencias relativas a esta, sobre la identidad y las cualificaciones profesionales de las personas propuestas para la ejecución del contrato o de los subcontratistas y sobre el diseño de los proyectos que se prevé realizar en el marco del contrato y la forma de ejecución de este, el poder adjudicador debe apreciar si esa información tiene un valor comercial que no se limita al contrato público de que se trate, de modo que su divulgación pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o la competencia leal. Por otro lado, el poder adjudicador puede denegar el acceso a tal información cuando su divulgación pueda obstaculizar la aplicación de la ley o ser contraria al interés público. No obstante, cuando se deniegue el acceso a la totalidad de la información, el poder adjudicador debe conceder el acceso al contenido esencial de esa misma información, a fin de garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva. En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la experiencia pertinente de los licitadores y a las referencias que acrediten dicha experiencia y sus capacidades, el Tribunal de Justicia considera que tal información no puede calificarse como confidencial en su integridad. En efecto, dado que, por regla general, la experiencia de un licitador no es secreta, en principio sus competidores no pueden ser privados de la información relativa a esa experiencia. En aras de la transparencia y para garantizar el respeto de las exigencias de buena administración y de tutela judicial efectiva, los licitadores deberán tener acceso al menos al contenido esencial de la información transmitida por cada uno de ellos al poder adjudicador acerca de su experiencia y de las referencias que la acrediten. No obstante, tal acceso se entiende sin perjuicio de las circunstancias particulares de determinados contratos de productos o de servicios sensibles que puedan justificar de manera excepcional que se deniegue facilitar la información a fin de garantizar el respeto de una prohibición o exigencia establecida por la ley o a la protección de un interés público. A continuación, en cuanto atañe a la información sobre las personas físicas o jurídicas, incluidos los subcontratistas, en las que un licitador indique apoyarse para ejecutar el contrato, el Tribunal de Justicia distingue entre los datos que permiten identificar a tales personas y los que se refieren, sin que sea posible efectuar tal identificación, a su cualificación o su capacidad profesional. Por lo que respecta a los datos no nominales, el Tribunal de Justicia no excluye que, en la medida en que sea plausible que el licitador y sus expertos o subcontratistas hayan creado una sinergia con valor comercial, deba denegarse el acceso a ellos. Así, el poder adjudicador tendrá que determinar si la divulgación de esos datos de identificación puede exponer al licitador a un menoscabo de la protección de la confidencialidad. A tal efecto, el poder adjudicador deberá tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidos el objeto del contrato público y el interés de dicho licitador y de dichos expertos o subcontratistas en participar, con los mismos compromisos negociados de manera confidencial, en ulteriores procedimientos de licitación. No obstante, en principio, la divulgación de información transmitida al poder adjudicador no puede denegarse si dicha información, pertinente para el procedimiento de licitación de que se trate, no tiene ningún valor comercial en el marco más amplio de las actividades de esos operadores económicos. En cuanto a los datos no nominales, el Tribunal de Justicia estima que, habida cuenta de su importancia para la adjudicación del contrato, el principio de transparencia y el derecho a la tutela judicial efectiva imponen que el contenido esencial de datos como la cualificación o capacidad profesional de las personas físicas o jurídicas encargadas de ejecutar el contrato, el tamaño y la disposición de los efectivos así constituidos, o incluso la parte de la ejecución del contrato que el licitador piensa confiar a subcontratistas, sea accesible a todos los licitadores. Por último, respecto al diseño de los proyectos que se prevé realizar en el marco del contrato público y a la descripción de la forma de ejecución del contrato, el Tribunal de Justicia indica que corresponde al poder adjudicador examinar si constituyen elementos o contienen elementos que puedan ser objeto de protección por los derechos de propiedad intelectual, en particular por los derechos de autor, y, en consecuencia, están comprendidos en un motivo de denegación de divulgación relativo a la aplicación de

la ley. Asimismo, recuerda que, aun en el caso de que ese diseño y esa descripción se consideren obras protegidas por los derechos de autor, tal protección se reserva únicamente a los elementos que expresan una creación intelectual propia de su autor, reflejando su personalidad. Además, y con independencia de este examen, la publicación de ese diseño y de esa descripción, que tienen un valor comercial, puede falsear la competencia, en particular reduciendo la capacidad del operador económico de que se trate para distinguirse por medio del mismo diseño y de la misma descripción en futuros procedimientos de contratación pública. Si bien es posible que el acceso íntegro a la información relativa al diseño de los proyectos y a la descripción de la forma de ejecución deba denegarse, el contenido esencial de esta parte de las ofertas debe ser accesible. En tercer y último lugar, el Tribunal de Justicia declara que, cuando al conocer de un recurso interpuesto contra una decisión de adjudicación de un contrato público se constate la obligación del poder adjudicador de comunicar al demandante información que haya sido tratada erróneamente como confidencial y la vulneración del derecho a un recurso efectivo a causa de que no se divulgara esa información, tal constatación no debe llevar necesariamente a la adopción de una nueva decisión de adjudicación, siempre que el Derecho procesal nacional permita al órgano jurisdiccional competente adoptar, durante la sustanciación del procedimiento, medidas que restablezcan el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva o le permitan considerar que el demandante puede interponer un nuevo recurso contra la decisión de adjudicación ya adoptada. El plazo para la interposición de tal recurso no debe empezar a correr hasta el momento en que el demandante tenga acceso a la totalidad de la información que había sido calificada como confidencial erróneamente.

- **Conclusiones de la Abogada General en el asunto C-123/21 P / Changmao Biochemical Engineering / Comisión.** De acuerdo con la Abogada General Ápeteta, el Tribunal de Justicia puede abstenerse de controlar la compatibilidad del Reglamento de base antidumping a la luz del Protocolo de Adhesión de China a la OMC. No obstante, dicha práctica de autolimitación solo es posible debido a la naturaleza y estructura flexibles de los acuerdos de la OMC. El 11 de diciembre de 2016 expiró el período de 15 años recogido en el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Protocolo de Adhesión de China»). Apoyándose en la referida expiración, la recurrente, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (en lo sucesivo, «Changmao»), interpuso un recurso ante el Tribunal General contra la decisión de la Comisión de mantener los derechos antidumping sobre las importaciones de ácido tartárico que la recurrente traía desde China. 1 La recurrente alegó que, con posterioridad al 11 de diciembre de 2016, la Comisión debería tratar a China como a cualquier otro país de economía de mercado en las investigaciones antidumping. A los efectos de la investigación antidumping en cuestión, lo anterior habría supuesto que la Comisión se habría visto obligada a utilizar los precios y costes de producción reales de Changmao en China para determinar si los productos de dicha compañía eran objeto de dumping en el mercado de la Unión. En vez de eso, sin embargo, al tratar a China como un país sin economía de Mercado, la Comisión utilizó los costes y precios de una empresa en un país sustitutivo (a saber, haciendo uso de la denominada «metodología del país análogo»). La Comisión fundamentó su elección en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base antidumping, 2 que permite utilizar la metodología del país análogo con respecto a China. Por su parte, la recurrente considera que esa disposición ya no es aplicable a China tras la expiración del período de 15 años, puesto que no es compatible con lo que quedó del Protocolo de Adhesión de China después del 11 de diciembre de 2016. En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que no podía controlar la conformidad del Derecho de la Unión (en este caso, del Reglamento de base antidumping) con la normativa de la OMC, de la que el Protocolo de Adhesión de China forma parte. 3 En el presente recurso de casación Changmao impugnó esa apreciación. En sus conclusiones de hoy, la Abogada General Tamara Ápeteta propone que el Tribunal de Justicia ratifique la sentencia del Tribunal General sobre ese particular y explica la razón por la que el Tribunal de Justicia debería abstenerse de ejercer el control jurisdiccional del Reglamento de base antidumping a la luz del Protocolo de Adhesión de China. Como cuestión preliminar, la Abogada General reconoce la tensión que deriva de la reiterada jurisprudencia según la cual los acuerdos de la OMC no se encuentran, en principio, entre las normas a luz de las cuales cabe controlar la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones de la Unión. La Abogada General explica, por un lado, que tanto la fuerza vinculante de los acuerdos internacionales de los que es parte la Unión como la facultad de control jurisdiccional conferida al Tribunal de Justicia son características del ordenamiento constitucional de la Unión. De ambas se obtiene la facultad del Tribunal de Justicia de controlar si las instituciones de la Unión Europea respetan las obligaciones de la Unión derivadas de los acuerdos de la OMC. Por otro lado, debido a la realidad política del sistema internacional de comercio, el Tribunal de Justicia ha dudado, desde sus primeros pronunciamientos, en ejercer su facultad de control jurisdiccional en lo que respecta a la conformidad de la legislación de la Unión con los acuerdos de la OMC. En sus conclusiones, la Abogada General señala que esta autolimitación judicial es el resultado del reconocimiento por parte del

Tribunal de Justicia de la naturaleza flexible del sistema OMC y de la realidad política de que los socios comerciales de la Unión no someten los actos de sus instituciones que entran dentro del ámbito de la normativa OMC al control de los tribunales. A la vista de esas consideraciones, las instituciones de la Unión, sin someterse al control del Tribunal de Justicia, pueden optar por una determinada interpretación de las disposiciones de los acuerdos de la OMC y, tras examinar las oportunas consecuencias, decidir, en caso necesario, apartarse de las obligaciones de la Unión establecidas en los acuerdos de la OMC. No obstante, la Abogada General destaca que la decisión de no ejercer el control jurisdiccional no debe malinterpretarse como una decisión del Tribunal de Justicia de renunciar por completo a su deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión. Esa autolimitación judicial reviste un carácter excepcional y solo es posible por así permitirlo los acuerdos OMC. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha reconocido supuestos en los que las razones para la autolimitación no concurrían y en los que, en consecuencia, el Derecho de la Unión fue objeto de control a la luz de la normativa de la OMC. Uno de esos casos dio lugar a la sentencia dictada en el asunto Nakajima, 4 sentencia en la que la recurrente se basó ante el Tribunal General. La Abogada General considera que el Tribunal General no incurrió en error por haber estimado que la sentencia dictada en el asunto Nakajima era inaplicable al presente supuesto. Considera que caben dos posibles interpretaciones de esa jurisprudencia. La interpretación restringida supone entender que el Tribunal de Justicia controla el Derecho de la Unión a la luz de la normativa de la OMC cuando es patente la intención del legislador de la Unión de aplicar la normativa de la OMC. La interpretación más amplia implicaría que el Tribunal de Justicia lleva a cabo el control jurisdiccional cuando compruebe que las instituciones de la Unión no tenían intención de apartarse de la normativa de la OMC. Según la Abogada General, ninguna de esas dos posibles interpretaciones es aplicable al presente asunto. El régimen del Reglamento de base antidumping establecido con respecto a China debe entenderse como específico en el ordenamiento jurídico de la Unión. Por tal motivo, el Tribunal de Justicia no puede concluir ni que tal régimen representa la transposición del Protocolo de Adhesión de China ni tampoco que las instituciones de la Unión no tuvieron la intención de apartarse de dicho Protocolo. En consecuencia, el carácter específico de Derecho de la Unión de ese régimen es la razón para que el Tribunal de Justicia se abstenga de ejercer su facultad de controlar jurisdiccionalmente actos de las instituciones de la Unión en relación con el Protocolo de Adhesión

Alemania (Sputnik):

- **Tribunal de Berlín anula las elecciones locales parlamentarias de 2021 por "graves irregularidades".** El Tribunal Constitucional del Estado de Berlín invalidó los resultados de los comicios para el parlamento de la capital alemana celebrados en 2021 debido a violaciones en la organización del proceso electoral, informó el Juzgado. "El Tribunal Constitucional del Estado declaró hoy [el 16 de noviembre] nulas las elecciones para la 19 Cámara de Representantes de Berlín y para los 12 Consejos de Distrito de la ciudad del 26 de septiembre de 2021 (...). La preparación de los comicios por sí sola representa un fallo electoral que ha dado lugar a otros errores significativos", indica el comunicado. El Juzgado encontró muchas inconsistencias y violaciones tras evaluar de manera exhaustiva "2.256 protocolos de todos los colegios electorales de Berlín, los datos proporcionados por la autoridad electoral estatal y un examen de alrededor de 100 informes de los más de 3.000 participantes en los procedimientos". "El Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que las normas constitucionales sólo pueden garantizarse si las elecciones de Berlín se declaran completamente inválidas (...). Los errores electorales son relevantes para el mandato", especificó. Ahora los comicios "deben repetirse en todo Berlín" en los próximos 90 días. "Las elecciones al Bundestag [Parlamento de Alemania] en Berlín no se ven afectadas. Esto se decide a nivel federal en otro procedimiento, regulado por separado", recalcó. El tribunal explicó que hubo pocas cabinas de votación y en la mayoría de los colegios electorales, según los cálculos de la comisión, sólo pudo votar la mitad de los ciudadanos. Además, subrayó, algunas oficinas electorales no entregaron todas las papeletas requeridas con anticipación, por lo que las mesas de votación estaban desabastecidas y "como resultado, algunos colegios electorales cerraron temporalmente" de manera ilegal, sin notificárselo a los votantes, los cuales hacían largas filas. Asimismo, "se hicieron copias de papeletas" que no cumplían "con las disposiciones legales" y "las boletas electorales se habían mezclado durante el proceso de impresión", por lo cual, el día de los comicios "al menos cinco de los 12 distritos emitieron papeletas de voto incorrectas". Según el tribunal, los errores identificados durante las elecciones privaron a miles de personas del derecho al voto y también podrían afectar a la distribución de escaños en la Cámara de Representantes de Berlín. "Debe tenerse en cuenta que se trata de un hecho único en la historia de las elecciones en la República Federal de Alemania", agregó.

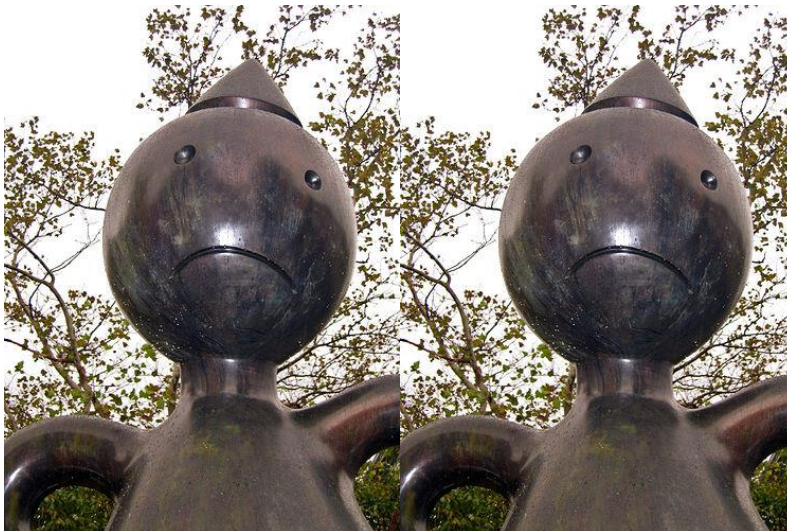
España (Poder Judicial):

- **El Tribunal Supremo declara nulo el despido de un trabajador un día después de hacer una reclamación interna por falta de pago del exceso de jornada.** El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha aplicado la garantía de indemnidad, declarando nulo el despido de un trabajador con un contrato de duración determinada que fue despedido el día después de que manifestara su disconformidad con la falta de pago del exceso de jornada, alegándose como causa del despido disciplinario una disminución del rendimiento que no se acreditó. Ese despido, inmediatamente después de la reclamación, imposibilitó que el actor efectuara ninguna reclamación judicial. La sentencia argumenta que, como regla general, las reclamaciones internas en el seno de la empresa no activan la garantía de indemnidad. Pero si un trabajador efectúa una reclamación interna e inmediatamente después es despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción contractual, la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución. El fallo de la sentencia ha sido puesto en conocimiento de las partes, y el texto íntegro de la resolución se notificará en los próximos días.

De nuestros archivos:


19 de junio de 2009
Alemania (EFE)

- **Un tribunal prohíbe exportar a China dos robots para unas plantas nucleares.** El Tribunal Administrativo de Fráncfort confirmó hoy la prohibición de exportar a China dos robots de última generación y fabricación alemana para realizar trabajos peligrosos en el interior de centrales nucleares. La Oficina Federal para el control de las exportaciones (Bafa) en la localidad de Eschborn había vetado la exportación de los robots de alta tecnología y un precio de 135.000 euros por unidad, pues no se puede descartar que sean utilizados para producir armas nucleares. El tribunal de Fráncfort confirmó el veto del organismo público, encargado de controlar el riesgo de las exportaciones de alta tecnología. Contra la prohibición había presentado un recurso el fabricante de los robots, una empresa de Baden Württemberg, que, entre tanto, se ha declarado en insolvencia por graves problemas económicos.



No van

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas

 @anaya_huertas

** El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.*